
Padres de 43 estudiantes mexicanos marchan a tres meses de desaparición

27/12/2014



Portando enormes fotografías de sus hijos desaparecidos colgando de sus cuellos, los padres de familia marcharon con algunos de sus compañeros de la escuela de Ayotzinapa (Guerrero, sur) y organizaciones campesinas por la emblemática avenida Reforma.

La marcha concluyó con un mitin en el céntrico Monumento de La Revolución, en el que los padres de familia volvieron a dirigir sus acusaciones contra el gobierno mexicano, al que ya han acusado de "inepto" por no haber encontrado a sus hijos.

En esta ocasión, los padres, que se aferran a la idea de que sus hijos siguen con vida, incluso aseguraron que las fuerzas armadas saben dónde están.

"Con ayuda de todo el pueblo vamos a encontrarlos aunque los tengan en los lugares más recónditos de los cuarteles militares, porque estamos seguros de que ellos los tienen", enfatizó Felipe de la Cruz, padres de unos de los estudiantes.

"Han sido tres meses muy largos para nosotros y no hay nada", dijo previamente a la AFP Felipe de la Cruz, que también es vocero del resto de los padres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre tras haber sido brutalmente atacados por sicarios y policías corruptos municipales en Iguala (Guerrero).

Durante la marcha, un grupo de estudiantes portaba una gigante bandera mexicana cuyos colores rojo y verde fueron sustituidos por el negro.

"¿Qué quiere Ayotzinapa?!", preguntaba un líder campesino, "¡Justicia! ¡Justicia!", respondía la muchedumbre.

"La violencia nos ha desgarrado a tal punto que ha desvanecido nuestras diferencias. Ya todos somos hermanos, todos los estudiantes somos uno", dijo a la AFP Ramón Gutiérrez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional.

La marcha concluyó sin incidentes, a diferencia de otras de las movilizaciones multitudinarias que han derivado en confrontaciones entre manifestantes radicales y policías antimotines.

El crimen, que ha estremecido a la sociedad mexicana y al mundo, ha detonado fuertes protestas también en Chilpancingo, la capital de Guerrero, y la peor crisis en dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El mandatario envió el 24 de diciembre un mensaje a la nación en el que pidió unión entre los mexicanos.

"Éste es el momento de construir, no para destruir; el momento de unir, no para dividir. El momento de fortalecer nuestras instituciones, no para debilitarlas; el momento de pensar en soluciones y de trabajar por México", dijo.

Según la fiscalía, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron entregados por los policías municipales de Iguala y la vecina comunidad de Cocula a integrantes del cartel de Guerrero Unidos, que los habrían asesinado e incinerado.

Únicamente los restos de uno de los 43 jóvenes han sido identificados con pruebas de ADN en un prestigioso laboratorio de Austria.

- Iglesia católica protesta por violencia -

Por otra parte, el secuestro y asesinato de un sacerdote cometidos esta semana también en Guerrero provocó una sentida protesta de la iglesia católica mexicana.

"¡Basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos", dijo la Conferencia del Episcopado Mexicano en un comunicado, en el que además exigió "el esclarecimiento de éste y de los demás crímenes que ha provocado dolor en tantos hogares" de México, azotado por la violencia generada

por el narcotráfico.

El cuerpo del sacerdote Gregorio López Gorostieta fue encontrado el jueves en un paraje del pequeño municipio de Tlapehuala (9.000 habitantes) con un balazo en la cabeza, tres días después de haber sido secuestrado por un comando cuando estaba en un seminario en la localidad de Pungarabato.

El secuestro del prelado provocó que el martes unas 300 personas, entre ellas decenas de sacerdotes, marcharan en calles céntricas de Pungarabato (36.000 habitantes) hasta la catedral local para implorar a los raptos que lo dejaran con vida.

Los sacerdotes se han convertido en un blanco del crimen organizado generado por el narcotráfico.

En la comunidad cercana de Ocotitlán, el sacerdote ugandés John Ssenyondo fue secuestrado en abril y sus restos fueron hallados en noviembre en una fosa clandestina junto con otros 12 cadáveres.

Tan solo en los dos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ocho sacerdotes han sido asesinados y dos se encuentran desaparecidos, según el informe "El riesgo de ser sacerdote en México", publicado a principios de diciembre por el Centro Católico Multimedial.
